



Al servicio de la paz y la justicia

SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, marzo dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024)

Benjamín de J. Yepes Puerta

Magistrado Ponente

Proceso: Responsabilidad Civil Extracontractual

Radicado: 05001-31-03-004-2013-00353-01

Demandantes: Ramón Enrique Mazo Zuleta y Otros

Demandados: Miriam Rodríguez Ramírez. y Otros

Asunto: Ejercicio de actividad peligrosa hace presumir la responsabilidad en cabeza de quien la ejerce.

Instancia: Segunda

Decisión: Modifica y Revoca

Rdo. Interno: 021-18

Providencia: Sentencia No. 012 de 2024

Procede la Sala a emitir sentencia mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto y sustentado en contra de la sentencia proferida el día 24 de enero de 2017 por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, por los demandantes RAMON ENRIQUE MAZO ZULETA,

en nombre propio y en representación de los menores MARTHA LUCIA, JOHN FREDY, CARLOS MARIO, LEIDY JHOANA MAZO; JAIME DANIEL MAZO DURANGO y GILMA INÉS MAZO DURANGO, dentro del presente proceso Declarativo - Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual que promovieron en contra de la señora MIRIAM RODRÍGUEZ RAMÍREZ, COOMULTRANSCON Y SEGUROS COLPATRIA S.A

I. SINTESIS DEL CASO¹

1. FUNDAMENTOS FACTICOS

1.1. El 11 de marzo de 2012 a las 17:30 horas, en la Avenida 80 con Calle 53 A de esta ciudad, el vehículo de servicio público tipo camioneta, de placas TNG-810, marca MAZDA, modelo 2009, conducido por el señor BIVIAN JAVIER LÓPEZ TOBÓN, de propiedad de la señora MYRIAM RODRÍGUEZ RAMÍREZ, afiliado a la empresa COOMULTRANSCO y asegurado mediante póliza emitida por SEGUROS COLPATRIA S.A., atropelló al señor OSCAR DARIO MAZO DURANGO en calidad de peatón, quien fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín donde falleció al día siguiente.

1.2. Para el momento del fallecimiento la víctima contaba con la edad de 26 años, por lo que de acuerdo con la Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera, tenía una esperanza de vida del 54.2. No tenía hijos, vivía en unión libre con la señora ASTRID DANERY TORO CALLEJAS

¹ [003Demanda.pdf](#) / [C001PRINCIPAL](#) / [Primera Instancia](#)

y le sobrevivían su padre RAMÓN ENRIQUE MAZO ZULETA y sus hermanos: JAIME DANIEL MAZO, GILMA INÉS MAZO y las menores de edad MARTHA LUCIA, JOHN FREDY, CARLOS MARIO, LEIDY JHOANA.

1.3. Con el referido deceso el señor RAMÓN ENRIQUE, sufrió perjuicios materiales dado a que su hijo velaba por su sostenimiento, con lo que percibía de la labor de oficial de construcción, donde devengaba en promedio un salario mínimo mensual legal.

1.4. Igualmente, tanto su progenitor como sus hermanos, demandantes en este asunto, sufrieron perjuicios morales ante la aflicción, nostalgia y tristeza por su pérdida, siendo una persona sana, alegre, con metas y sueños; así como daños a la vida de relación y/o alteraciones a las condiciones de existencia teniendo en cuenta las múltiples actividades que realizaban en familia.

1.5. Mediante Resolución 201226-405 la Secretaria de Transporte y Tránsito de Medellín, declaró controversialmente responsable al señor BIVIAN LOPEZ, por conducir en estado de embriaguez (tercer grado de intoxicación aguda - 175 mgs. de etanol).

2. SINTESIS DE PRETENSIONES

2.1 Los demandantes pretendieron que se declarara civil y solidariamente responsables a la señora MYRIAM RODRIGUEZ RAMIREZ como propietaria del vehículo, a COOMUTRANSCON como la empresa afiliadora del mismo y a SEGUROS COLPATRIA como compañía aseguradora, por los perjuicios que le fueron ocasionados con la muerte del señor OSCAR DARÍO

MAZO DURANGO, a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 11 de marzo de 2012.

2.2 Que, como consecuencia de lo anterior, se condenara a los demandados al pago de dichos perjuicios, así²:

A favor del señor RAMÓN ENRIQUE MAZO, por daño material en su modalidad de lucro cesante pasado y futuro, el monto equivalente a 237.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes (\$140.065.200, para el momento de la presentación de la demanda), considerando su esperanza de vida y en razón del 75% de los ingresos de la víctima y el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales por perjuicio moral, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 599 de 2000.

A favor de los demás demandantes, señores JAIME DANIEL MAZO DURANGO, GILMA INÉS MAZO DURANGO, MARTA LUCÍA, JHON FREDY, CARLOS MARIO y LEIDY JOHANA MAZO, por daño moral, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y por daño a la vida de relación y/ alteración de las condiciones de existencia, el mismo monto para cada uno.

2.3. Asimismo, que se condene a los demandados a cancelar los intereses legales estipulados en el Artículo 1617 del Código Civil, a la tasa del 6%, desde la fecha del fallo de primera instancia, hasta el pago de las sumas reconocidas en el mismo.

² Pág. 45-50 / [004AnexoDeDemanda.pdf](#) / [C001PRINCIPAL](#) / [Primera Instancia](#)

2.4. Y, por último, que se condene en costas a los demandados a favor de todos los demandantes.

3. Contestación de la demanda.

3.1 SEGUROS COLPATRIA S.A. ahora AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.³.

Se opuso a la totalidad de las pretensiones, proponiendo las siguientes excepciones:

INEXISTENCIA DEL PERJUICIO DE DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN, ya que de acuerdo con la jurisprudencia este se presentaba con la pérdida de un miembro o una función que genera variaciones de las condiciones de vida del lesionado, de tal manera que no era un perjuicio que sufriera los familiares de quien fallece, sino la víctima.

AUSENCIA DE COBERTURA, dado que la póliza número 6158005604 en su clausulado tiene pactada unas exclusiones que se configuran en este caso, por ende, no exonera a la aseguradora de asumir el pago de la indemnización que eventualmente se le reconozca a los demandantes y que se encuentra enlistada en el numeral 1.4, literales B, G y J, donde se expresa que Colpatría quedará librada de toda responsabilidad si el conductor del vehículo asegurado, para el momento del siniestro, se encontraba bajo sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que produzca dependencia física o psíquica, si el automotor se estaba utilizado para una actividad distinta a la pactada y por fuera de las rutas establecidas por el ministerio de transporte; quedando acreditado en este

³ [008ContestacionDeDemanda.pdf](#) / [C001PRINCIPAL](#) / [Primera Instancia](#)

caso que quien conducía el vehículo asegurado se encontraba en estado de embriaguez, realizando una actividad diferente al transporte de pasajeros que fue la acordada en el contrato y por una ruta no habilitada para la empresa con dicha finalidad.

LIMITE ASEGURADO, precisando que en caso de que no prosperaran las excepciones anteriores, la póliza tenía establecido unos límites al valor asegurado por amparo de lesiones o muerte a una persona, el monto de \$53.560.000 y por perjuicios morales y lucro cesante, se estableció un sub-límite del 60%, por lo que solo se cubriría hasta la suma de \$ 32.136.000.

NO COBERTURA DE PERJUICIO DE DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN, por cuanto la póliza establece en su clausulado 1.4, literal O, que la aseguradora queda librada de toda responsabilidad cuando se ocasionen perjuicios fisiológicos o daño a la vida en relación.

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CUASA POR PASIVA, en consideración a que a la compañía aseguradora no puede ser declarada en este caso responsable civilmente por el hecho dañoso el cual se derivaron los perjuicios que se pretenden sean indemnizados, por lo que dicha responsabilidad en este caso podría predicarse del asegurado y de ser así, la obligación de la aseguradora sería la de indemnizar los perjuicios amparados en la póliza.

TASACIÓN EXCESIVA DEL PERJUICIO, en cuanto al moral, pues se desconoce lo definido por la jurisprudencia respecto de los valores reconocidos como topes máximos y atendiendo al parentesco del reclamante con la víctima y, frente al lucro cesante, por no haberse

calculado con las fórmulas financieras establecidas y sobre un ingreso base que no corresponden con la realidad, ni está debidamente acreditado.

3.2 COOMULTRANSCON y la señora **MYRIAM RODRÍGUEZ RAMÍREZ** no emitieron pronunciamiento alguno.

4. Sentencia de primera instancia⁴.

El Juez A-quo verificó inicialmente lo relativo a la legitimación en la causa, señalando que, por activa, se había acreditado la paternidad del señor RAMÓN ENRIQUE MAZO ZULETA respecto de OSCAR DARÍO MAZO DURANGO, con el registro civil de nacimiento de este y la condición de hermanos del mismo, de los señores MARTHA LUCÍA, JOHN FREDY y CARLOS MARIO MAZO con los registros civiles de nacimiento de cada uno de ellos. Sin embargo, como respecto de los codemandantes JAIME DANIEL, GILMA INÉS Y LEIDY JHOANA MAZO, no se aportó prueba que dieran cuenta de la calidad aducida o de cualquier otro intereses que les asistiera para la reclamación hecha, se declaró su falta de legitimación en la causa por activa; y por pasiva, se demostró que la señora MYRIAM RODRÍGUEZ RAMÍREZ figuraba como propietaria del vehículo de placas TNG810, y que éste se encontraba afiliado a COOMULTRANSCON y asegurado por responsabilidad mediante póliza emitida por AXA COLPATRIA S.A.

Concluyó que del material probatorio se evidenciaba que concurrían los elementos que estructuran la responsabilidad civil extracontractual,

⁴ [20130353 fallo.wav](#) / [CD FOLIO 187 CUA 1](#) / [AUDIOS 2013 00353](#) / [C001PRINCIPAL](#) / [Primera Instancia](#)

derivada de actividades peligrosas, toda vez que estaba demostrado el accidente referenciado en la demanda, en el cual el señor BIVIAN JAVIER GÓMEZ, conduciendo el vehículo de placas TNG 810 en estado de embriaguez (175 mgs de etanol) había arrollado al señor OSCAR DARÍO MAZO DURANGO, causándole múltiples heridas –hecho-, el fallecimiento de la citada víctima –daño- y que como consecuencia de las mencionadas heridas había ocurrido la muerte del señor OSCAR DARÍO en el centro hospitalario al cual había sido remitido -la relación de causalidad, por lo que declaró responsables de los perjuicios ocasionados con el deceso de la víctima al citado conductor, a la propietaria del vehículo y a la empresa afiliadora como guardianes del mismo.

En cuanto a las excepciones propuestas por la compañía aseguradora, declaró probada la que nominó “AUSENCIA DE COBERTURA”, con fundamento en la exclusión contemplada en el 1.4 literal B de las condiciones generales del contrato, donde se establecía como tal que el conductor se encuentre *“bajo el influjo de sustancias psicoactivas o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o síquica”*, y que estaba plenamente probado, el tercer grado de embriaguez del conductor, como se evidenciaba del resultado arrojado por la prueba de alcoholemia que le había sido practicada, por lo que se abstuvo de referirse frente a las demás excepciones.

Respecto a los perjuicios, señaló que, si bien no se había probado el monto devengado por el occiso, si se había podido establecer que realizaba una actividad productiva, y conforme a la jurisprudencia podía presumirse que por lo menos sus ingresos eran de un salario mínimo; sin embargo, como no se había logrado acreditar la ayuda que afirmaron los

demandantes le prestaba el señor OSCAR DARÍO, en vida, a su progenitor, y, por el contrario, se podía colegir de las reglas de la experiencia que un salario mínimo resultaba insuficiente para cubrir los gastos para el sostenimiento de una familia y en este caso, el fallecido ya había conformado un hogar independiente, resultando forzado que gran parte de los ingresos que percibía los destinara para ayudar a los actores, por lo que se denegó el reconocimiento del perjuicio reclamado en la modalidad de lucro cesante.

Respecto a los perjuicios morales, que estos se presumían en los parientes de primer grado de la víctima, conforme lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo que bastaba acreditar este vínculo de parentesco para su reconocimiento, lo que se cumplió en este caso, por lo que de acuerdo con el arbitrio judicial se le reconoció por este concepto: al señor RAMÓN ENRIQUE MAZO ZULETA, en su condición padre del occiso la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y para los hermanos MARTA LUCIA, JOHN FREDY, CARLOS MARIO MAZO, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

5. Impugnación⁵.

Los demandantes interpusieron recurso de apelación, exponiendo dos reparos frente a la misma: 1) La declaración de falta de legitimación en la causa por activa de algunos de los demandantes, sin haberse hecho uso de la facultad oficiosa de decretar prueba en ninguna de las etapas del

⁵ Minuto 41:40 / [20130353_fallo.wav](#) / [CD_FOLIO_187_CUA_1](#) / [AUDIOS_2013_00353/C001PRINCIPAL](#) / [Primera Instancia](#)

proceso; 2) La exoneración de la aseguradora AXA COLPATRIA S.A., con fundamento en una exclusión que debió tenerse por ineficaz por no se encontrarse en caracteres destacables en la primera página de la póliza, conforme lo establece el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 45 de 1990, las Circulares Externas Nos. 007 de 1996 y 076 de 1999 de la Superintendencia Financiera y el artículo 184 del Estatuto Orgánico.

En esta instancia⁶, dentro de la oportunidad concedida, expuso que ante la admisión de la demanda donde se indicó la calidad de cada uno de los demandantes, el juez de primer grado pudo haber hecho uso de la facultad oficiosa del decreto de pruebas para disponer el arribo de los certificados civiles de nacimiento echados de menos, en lugar de declarar la falta de legitimación y, que como en esta instancia, en ejercicio de dicha facultad, se le había ordenado aportar dicha documentación, se había procedido a cumplir con este requerimiento.

En cuanto al segundo reparo, reiteró la ineficacia de la exclusión con fundamento en la cual se había exonerado a la aseguradora, por no cumplir con las exigencias que legalmente se contemplan, específicamente que esté contenida en la primera página de la póliza en caracteres destacados y que si bien en este caso, si se habían ubicado en ese espacio algunas exclusiones, la que versa de manera específica sobre la embriaguez del conductor no está inscrita en la misma.

Al respecto precisó que si bien era cierto existía un pronunciamiento reciente, en el que la H. Corte Suprema de Justicia interpretó que las

⁶ [17MemorialSustentacionYRegistros.pdf](#) / [Segunda Instancia](#)

disposiciones que regulan el asunto, solo expresaban que las condiciones generales debían contener, de manera continua y con posterioridad a la primera página, amparos y exclusiones, también lo era, que tal interpretación contrariaba el artículo 27 del Código Civil *"cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu"*, por cuanto los artículos 44 de la Ley 45 de 1990 y 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero eran claros, por lo que no tenían lugar a interpretación que desconociera su tenor literal.

Adicional a lo anterior, solicitó que se tuviera en cuenta en este caso, la protección al principio de seguridad jurídica, debido al tiempo que ha transcurrido sin que las víctimas obtengan una decisión de fondo, en el sentido que los "cambios normativos" ocurridos con posterioridad a la formulación de la demanda, no afectará las pretensiones invocadas en la misma.

Dentro del término concedido para la réplica, la compañía aseguradora expuso⁷, en cuanto a la decisión de exonerar a esa sociedad, que los argumentos esbozados como soporte de la misma se encontraban acordes con el acervo probatorio y que no era procedente colegir, como lo pretendía la apoderada de la parte demandante, que la exclusión que dio lugar a dicha decisión, no podría aplicarse en este caso, al tildarla de inválida, por no estar enlistada en la primer hoja de la póliza; sin embargo, precisó que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC2879 de 2.022, unificó la posición respecto a la ubicación en el contrato de seguro o documento en que debían establecerse las

⁷ [19MemorialAlegatos.pdf](#) / [Segunda Instancia](#)

exclusiones, "en el sentido de definir la adecuada interpretación de la norma sustancial bajo estudio, esto es, del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, conforme a la cual, en sintonía con las disposiciones de la Circular Jurídica Básica de la Superintendencia Financiera de Colombia, en las pólizas de seguro los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, a partir de la primera página de la póliza, en forma continua e ininterrumpida."

Por tanto, señaló que en este caso se trataba de un contrato de seguro contenido en la póliza No. 6158005604, cuyas condiciones generales se encuentran contenidas en el clausulado P1601 de octubre de 2.005, que en el capítulo I denominado "AMPAROS Y EXCLUSIONES", establecía la cobertura del contrato de seguro, es decir, a partir de la página siguiente a la caratula de la póliza y en los literales B, G y J, se establecieron las exclusiones invocadas en las excepciones, fundamento de la decisión de exoneración de dicha compañía, por lo que considera que la misma fue acertada.

De otro lado, hizo referencia al límite asegurado, respecto al amparo de responsabilidad civil extracontractual por muerte de una persona, para indicar que el monto acordado por este concepto (\$53.560.000), no podía ser objeto de indexación, pues conllevaría a un rompimiento del equilibrio contractual que debe existir entre la contraprestación pactada entre tomador y aseguradora, a la vulneración de los principios fundamentales de las relaciones entre particulares, y contrariaría lo establecido en el artículo 1.079 del Código de Comercio, que establece que "[E]l asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada..." y el artículo 1088 del mismo compendio normativo, por

causarse un detrimento patrimonial para la aseguradora y un enriquecimiento injustificado del asegurado.

Por lo anterior, solicitó se confirmara la decisión cuestionada por ser plenamente válida y sin yerro alguno.

6. Prueba de Oficio.

Mediante auto del 8 de febrero de los corrientes, en ejercicio de la facultad oficiosa para decretar pruebas, se ordenó a la parte actora allegar los registros civiles de nacimiento de los señores JAIME DANIEL MAZO DURANGO, GILMA INÉS MAZO DURANGO Y LEIDY JHOANA MAZO⁸, quien dentro del plazo otorgado, arrió al proceso los registros civiles de nacimiento de LEIDY BIBIANA MAZO DURANGO, YOANA MARCELA MAZO DURANGO, GILMA INÉS MAZO DURANGO y JAIME DANIEL MAZO DURANGO⁹.

II. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde entonces a esta Sala, determinar: **i)** Si se acreditó por la parte demandante la legitimación de los demandante JAIME DANIEL MAZO DURANGO, GILMA INÉS MAZO DURANGO y LEIDY JOHANA MAZO, dentro de la oportunidad concedida en esta instancia, conforme a la prueba de oficio decretada; **ii)** Si la exclusión contemplada por fuera de la primera página de la póliza es ineficaz y por ende, no podía considerarse la que se tuvo como fundamento de la exoneración de la compañía aseguradora, por

⁸ [12AutoDecretaPruebaCorreTraslado.pdf](#) / [Segunda Instancia](#)

⁹ [17MemorialSustentacionYRegistros.pdf](#) / [Segunda Instancia](#)

estar en un anexo posterior, debiendo en consecuencia, condenársele al pago de los perjuicios reconocidos en la sentencia hasta el límite del valor asegurado.

III. PLANTEAMIENTO SUSTENTATORIO DE LA DECISIÓN

3.1. Realizando el control de legalidad establecido en el artículo 132 del Código General del Proceso, no se advirtió vicio ni irregularidad alguna que configuren nulidad. Igualmente, se aprecian reunidos los presupuestos procesales requeridos para proferir una decisión de fondo.

De otro lado, claro es que la competencia de este Tribunal se circunscribe a examinar únicamente las concretas inconformidades señaladas por los apelantes, pues tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dado que “...Es en el Código General del Proceso donde se implementó el «recurso de apelación» en el campo civil, mismo que refiriéndose a sentencias contempla para el reclamante tres pasos distintos: la interposición, la exposición del reparo concreto y la alegación final. En ese orden de ideas, el inconforme durante el término de ejecutoria deberá discutir los elementos de la providencia que le generen malestar y expresar de forma breve los mismos, toda vez que el enjuiciador de segundo grado solamente basará su examen en las objeciones concretas que el suplicante haya formulado tal y como lo describe el inciso 1º del artículo 320 ibídem, siendo competente únicamente para pronunciarse de lo expuesto por ese sujeto procesal tal y como reza el inciso 1º del canon 328 siguiente. Seguidamente tiene operancia la etapa ante el superior, no menos importante y destinada al desarrollo y sustento de

lo ya anunciado en precedencia (...) ¹⁰." (Subrayas del Despacho), por lo que a tal empeño nos enfocamos.

3.2. De la legitimación en la causa por activa en los procesos de responsabilidad para el resarcimiento de perjuicios.

La legitimación en la causa alude a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones de la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, y desde el pasivo, ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia.

Por tanto, quien demanda debe acreditar la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, que, en los casos de reparación de perjuicio, como ocurre en este caso, será la efectiva causación de un daño, con fundamento en el principio según el cual *"nadie puede enriquecerse a costa ajena, ni mucho menos pedir indemnización de un daño que no ha sufrido"*.

Así las cosas, cuando la víctima de un hecho lesivo fallece, los parientes de ésta, como en este caso, pueden reclamar la indemnización del perjuicio que hayan sufrido, ya sea patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, cuando se demanda invocando dicha condición, debe acreditarse la misma con el respectivo registro civil de nacimiento, que es la prueba legalmente admisible para demostrar el parentesco de consanguinidad.

¹⁰ (STC11429-2017). (STC2423-2018 y STC3969-2018), reiterada en sentencia STC4673-2018.

En el *sub judice*, los actores pretendieron la reparación de los perjuicios que les fueron ocasionados con la muerte del señor OSCAR DARÍO MAZO DURANGO; el señor RAMON ENRIQUE MAZO ZULETA, en su condición de padre la víctima, lo que acreditó con el registro civil de nacimiento del fallecido y MARTHA LUCIA, JOHN FREDY, CARLOS MARIO, LEIDY JHOANA, JAIME DANIEL y GILMA INÉS MAZO DURANGO, como hermanos, sin embargo, solo se arrimaron a la demanda los registros civiles de nacimiento de los tres primeros, lo que conllevó a que respecto de los tres últimos se declarara por el *a quo* la falta de legitimación.

Ahora, es sabido que el artículo 84 del Código General del Proceso impone a la parte la carga de allegar la prueba en la calidad en la que actúa, y de ello debe hacerse responsable quien asume la representación judicial en tanto es una cuestión de puro derecho para la cual es contratado, y no precisamente para fustigar al Juez por no haber hecho lo que a él competía; no obstante, ante la evolución de los tipos procesales regulados en nuestro ordenamiento jurídico, que no son ni dispositivos puros, pero tampoco inquisitivos rígidos, el modelo de Estado Social de derecho al cual adscribimos desde la Constitución del 91, el interés general que en todo caso hoy en día se pregona, aún en los procesos intersubjetivos de índole patrimonial de esta naturaleza, y a la idea de una justicia material como verdadera garantía superior de los justiciables, mucho más cuando de menores, incapaces u otros sujetos de especial protección se trate, también es cierto que es deber del juez verificar el cumplimiento de dicho requisito al momento de admitir la demanda, para efectos de sanear desde el inicio cualquier falencia que pueda conllevar a retrasos en el trámite, la

imposibilidad de su continuación o como en este caso, a una denegación de justicia.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo del Tribunal, si bien se allegaron los registros civiles de JAIME DANIEL MAZO DURANGO y GILMA INÉS MAZO DURANGO, no se adunó el de LEIDY JHOANA MAZO DURANGO, y en su lugar, fueron aportados los de LEIDY BIBIANA MAZO DURANGO y YOANA MARCELA MAZO DURANGO, quienes no actuaron como demandantes en este asunto y aunque ello pueda obedecer a un error en la digitación de los nombres de los demandantes, quedando unido el de dos personas diferentes, escapa de las facultades del funcionario la corrección del mismo, pues ello implicaría reformar los hechos y pretensiones de la demanda, para incluir a dos actores diferentes a los inicialmente indicados, en reemplazo de cuyo nombre fue equivocadamente citado, aspecto que no solo le compete a la parte, sino que además, la etapa procesal para realizar dicha actuación ya fue superada, resultando insubsanable. Toda una pena de cara a quien se encomienda una labor de representación judicial, lo más básico es citar al menos correctamente los nombres de quienes compondrán cada extremo subjetivo, pero acá ni lo uno, ni lo otro, ni se citaron bien a todos, y no de todos se allegó su acreditación, pretender que hasta ese extremo llegue la labor del juez terminaría desnaturalizando la esencia adversarial del proceso.

Así las cosas, con la referida prueba quedó acreditada la legitimación en la causa por activa de los señores JAIME DANIEL MAZO DURANGO y GILMA INÉS MAZO DURANGO, y naturalmente el interés jurídico en la reclamación del resarcimiento de los perjuicios que les fueron ocasionados con el fallecimiento de su hermano OSCAR DARÍO MAZO DURANGO, por lo

que se modificará el numeral de la sentencia de primera instancia, para en su lugar, reconocerles los que efectivamente acreditaron en este asunto, esto es, solo los perjuicios morales, ante la presunción que ha planteado la jurisprudencia respecto de los parientes cercanos conforme a la exposición que al respecto se hizo en la decisión de primer grado, presunción que en todo caso no fue desvirtuada por el extremo pasivo, acogiéndose la tasación efectuada en la misma para los hermanos, esto es, 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que no fue reprochada por ninguna de las partes.

Con relación a la decisión de falta de legitimación en la causa por activa de LEIDY JHOANA MAZO DURANGO, resulta imperiosa su confirmación ante la ausencia de prueba de la condición en la que afirmó actuar, acorde con lo ya reseñado.

3.3. De las exclusiones en el contrato de seguro, de la que se hace derivar también la falta de legitimación por pasiva.

Las exclusiones en el contrato de seguro, han sido definidas por la doctrina como aquellos *“hechos o circunstancias que, aun siendo origen del evento dañoso o efecto del mismo, no obligan la responsabilidad del asegurador. Afectan, en su raíz, el derecho del asegurado o beneficiario a la prestación prevista en el contrato de seguro. Tienen carácter impeditivo en la medida en que obstruyen el nacimiento de ese derecho y, por ende, el de la obligación correspondiente”*¹¹.

¹¹ OSSA, Efrén. Teoría General del Seguro – El contrato. Ed. Temis, Bogotá. 1991, p. 469.

Así las cosas, es posible que ciertos hechos, conductas o condiciones queden exceptuadas del amparo brindado por el contrato de seguro, ya sea por disposición legal o porque así lo acuerden las partes, de manera lícita, exclusiones que delimitan los riesgos que el asegurador se obliga a asumir.

Ahora, para tal efecto, también se exigen algunos requisitos frente a la forma de consagración de dichas exclusiones, como la enlistada en el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que contempla los requisitos de la póliza, señalando en su numeral 2, literal c:

c. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza.

Este requisito, generó múltiples controversias judiciales, al plantearse la discusión sobre la aplicación literal o no la exigencia referenciada, esto es, que se encontraran relacionadas “en la primera página de la póliza”, que conllevaron a emitir decisiones disímiles, acogiendo en unas el criterio de literalidad de la norma para estimar que absolutamente todas las exclusiones debían estar enunciadas en dicha parte de la póliza¹² y en otras, que podría ser a partir de la primera página en forma continua y destacada¹³; habiendo asumido esta Sala, antes de que el ponente la integrara, la primera de las posiciones¹⁴.

¹² STC de 25 de julio de 2013, exp. 2013-01591, STC 514-2015, 29 ene., STC 17390- 2017, 25 oct., STC 9895-2020 y STC 12213-2021, 16 sep

¹³ STC 4841-2014, SC 4527- 2020 y SC 4126-2021.

¹⁴ Sentencias del 18 de septiembre de 2017. Rdo. 05001 31 03 009 2012 00631-01 y del 21 de agosto de 2019. Rdo. 05001 31 03 010 2013 01010 01. M.P. JULIÁN VALENCIA CASTAÑO

Al respecto, debe indicarse que la Superintendencia Financiera, en ejercicio de la facultad legal de “[l]nstruir a las entidades vigiladas y controladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”¹⁵ emitió la Circular Externa 029 de 2014, mediante la cual reexpidió la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996), “actualizando su contenido con la normatividad y con los pronunciamiento jurisprudenciales vigentes en materia financiera, aseguradora y del mercado de valores.”

Es así que, en la Parte II, Título IV, Capítulo II, numeral 1.2.1, instruyó sobre los requisitos generales de la póliza, en los siguientes términos:

“Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 del art. 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información:

1.2.1.1. En la carátula

1.2.1.1.1. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del C.Cio.

1.2.1.1.2. En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresión, el contenido del inciso 1 del art. 1068 del C.Cio.

¹⁵ Artículo 11 del Decreto 4327 de 2005, modificado por el Decreto 1848 de 2016 y por el artículo 2 del Decreto 2399 de 2019

Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal.

1.2.1.2. A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones)

Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza. *Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral."* (Resaltos fuera del texto).

De esta manera, la citada entidad privilegió la interpretación que mejor se ajustaba a la voluntad de las partes y a las necesidades de conocimiento e información del consumidor y que al mismo tiempo cumple con la finalidad de estas disposiciones, que no es otra, que procurar el conocimiento por el asegurado, de los eventos amparados y los que se encuentran excluidos, de forma fácilmente identificables y comprensibles, evitando que se aleguen después limitaciones consignadas de manera aislada o sorpresiva.

Con fundamento en lo anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo una de las finalidades del recurso de casación, más precisamente la unificación de la jurisprudencia y, luego de realizar un estudio sobre el tema, expuso lo que consideró era la adecuada

interpretación de las disposiciones que regulan la consagración de las exclusiones contractuales, así¹⁶:

“Con apoyo en los elementos hermenéuticos antes señalados, considera la Corte que una adecuada interpretación del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero exige su análisis armónico con la normativa que ha proferido la Superintendencia Financiera «para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el artículo 184 numeral 2° EOSF» y concretamente, la exigencia de la CE 029 de 2014 respecto a la ubicación de los amparos y exclusiones a partir de la primera página de la póliza, interpretación que no sólo permite cumplir con las exigencias de información y conocimiento del tomador sino también atender el principio general de prevalencia de la voluntad de las partes contratantes”.

A juicio de la Sala, esta intelección se corresponde en mejor medida con las condiciones actuales del mercado asegurador, en el que se ha llegado a un grado de detalle en la delimitación del riesgo que, por lo general, haría imposible la inclusión de todas las coberturas y exclusiones únicamente en la primera página de la póliza –al menos en un formato legible, como es de rigor–.

“...”

Cuando la norma en cita alude a «la primera página de la póliza» debe entenderse que se refiere a lo que esa expresión significa textualmente, es decir, al folio inicial del clausulado general de cada seguro contratado, pues es a partir de allí donde debe quedar registrado, con la claridad, transparencia y visibilidad del caso, uno de los insumos más relevantes para que el tomador se adhiera, de manera informada y reflexiva, a las condiciones negociales predispuestas por su contraparte: la delimitación del riesgo asegurado.

¹⁶ Sentencia SC-2879 de 2022, M. P.: Luis Alonso Rico Puerta

A pesar el citado precedente, en el caso concreto se trata de una reclamación judicial efectuada desde el 2013, fecha para la cual, aún no se había expedido por la Superintendencia Financiera la Circular Externa 029 antes referenciada, mediante la cual se actualizaron las disposiciones que instruían para dar cumplimiento los requisitos de la póliza contemplados en el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, indicando que los amparos y las exclusiones debían enunciarse **a partir de la primera página de la póliza** de manera continua y en caracteres destacadas, variando de esta manera las instrucciones que al respecto se habían enunciado inicialmente por dicha entidad en el título VI de la Circular Básica Jurídica número 007 de 1996, donde, en atención a lo establecido en la norma del Estatuto Orgánico antes citada, señalaba que debían incluirse en la **primera página o carátula de la póliza**.

Igualmente, tenemos que la providencia de unificación de la posición de la Corte sobre dicho aspecto, se emitió recientemente –año 2022-, momento hasta el cual se presentaban decisiones disímiles sobre la forma como debía cumplirse con el requisito en cuestión, pues en algunas se consideraba que debía ser en la primera página de la póliza, por así exigirlo normas de carácter público y por ende, de obligatorio cumplimiento y, en otras, se estimaba que podían incluirse a partir de dicha página, acogiendo el concepto amplio de póliza y las dificultades que en ocasiones podían presentarse para incluir en una sola página todos los amparos y exclusiones.

Por tanto, dado el tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda -25 de abril de 2013-, hasta la fecha, que supera ampliamente los términos que se han dispuesto por el legislador para dirimir una controversia por vía judicial y, que en ese interregno han surgido variaciones

considerables en el aspecto que se cuestiona en alzada, de cara a las expectativas que se tenían por los actores para el momento de formular sus pretensiones, debe tenerse en consideración el *principio de la seguridad jurídica* al que se refiere el apelante en su sustentación, que incluso tiene un rango constitucional, cuyo alcance ha sido explicado por el máximo órgano en la materia, así¹⁷:

“3. La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta // La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone una garantía de certeza... En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble dimensión. De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la solución del asunto sometido a consideración del Estado... En el ámbito legal, las normas de procedimiento establecen términos dentro de los cuales se deben producir las decisiones judiciales (Códigos de Procedimiento Civil, Laboral y de seguridad social, penal y Contencioso Administrativo), ... 4. La existencia de un término para decidir garantiza a los asociados que puedan prever el momento máximo en el cual una decisión será adoptada. Ello apareja, además, la certeza de que cambios normativos que ocurran con posterioridad a dicho término no afectará sus pretensiones. En otras palabras, que existe seguridad sobre las normas que regulan el conflicto jurídico o la situación jurídica respecto de la cual se solicita la decisión. Ello se resuelve en el principio según el cual las relaciones jurídicas se rigen por las normas vigentes al momento de configurarse dicha relación, que, en buena

¹⁷ Sentencia T-502 de 2002, citada en Sentencia C-250 de 2012. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.

medida, se recoge en el principio de irretroactividad de la ley; en materia penal, debe señalarse, existe una clara excepción, por aplicación del principio de favorabilidad, que confirma la regla general // Al considerarse, en el ámbito de la certeza y estabilidad jurídica (seguridad jurídica), la existencia de precisos términos para que la administración o el juez adopten decisiones y el principio de conocimiento de las normas aplicables al caso concreto, se sigue que dichos términos fijan condiciones de estabilización respecto de los cambios normativos".

Así las cosas, no resulta ajustado a dicho principio que se decida el aspecto relativo al lugar donde deben estar contempladas las exclusiones del contrato de seguro, con fundamento a disposiciones y decisiones adoptadas con posterioridad a la formulación de las pretensiones de la demanda, máxime que, como se indicó, el lapso de tiempo que ha transcurrido hasta la fecha en que finalmente se va emitir un pronunciamiento frente a la apelación formulada en contra de la decisión de primera instancia y por ende, a definir la citada controversia, ha superado de manera exorbitante (más de diez años) el término estimado por la ley para tal efecto, no siendo acorde de cara al principio antes referenciado, a la justicia que debe prevalecer en las decisiones judiciales, ni puede imponerse tal carga a la parte.

Ahora, independientemente de la posición que se asuma sobre el lugar donde deben ir contempladas, como la misma norma exige claridad y precisión frente a las exclusiones con el fin de que se establezca plenamente el alcance de la cobertura contratada, ya sea que se enuncien de manera sucinta todas en la carátula, de ser posible y se cite el documento donde se encuentren especificados los supuestos que enmarca cada una o, porque se opte, por temas de espacio, remitir directamente al documento que las contiene de manera detallada.

En el *sub júdice*, tenemos que, al verificarse la póliza número 6158005604¹⁸, fundamento de la pretensión elevada respecto de la compañía aseguradora demandada, no se enunciaron las exclusiones de dicho contrato, y que solo en la hoja denominada “HOJA ANEXA No. 1” de la referida póliza¹⁹, en la parte final, luego de los amparos y valores asegurados con un desglose de lo ya indicado en la anterior, se incluye el acápite “EXCLUSIONES, limitándose a indicar como tal: “*LESIONES CORPORALES O MUERTE CAUSADAS AL CÓNYUGE O COMPAÑERO (A) PERMANENTE, O A LOS PARIENTES EN CUARTA GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD DEL CONDUCTOR, DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO ASEGURADO O DE LOS SOCIOS DEL ASEGURADO.*”

Aunado a lo anterior, tenemos que en la referida póliza, seguidamente de la relación de los amparos contratados y el valor asegurado de cada uno, se indica que el contrato se seguro allí contemplado, se regirá por las “*CONDICIONES GENERALES FORMA P1601 DE OCTUBRE DE 2005*”, las cuales no solo no fueron adunadas al proceso, pues el documento que arrió al proceso, como parte integrante de la póliza y que contiene la exclusión alegada por la compañía asegurada para exonerarse del valor acordado en el referido negocio, se encuentra contenido en el documento denominado “*PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL TRANSPORTARES DE SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS*”, FORMA P1600 DE OCTUBRE DE 2005, que tampoco fue incluido en el espacio destinado para indicar las cláusulas y condiciones

¹⁸ Pág. 10/ [008ContestacionDeDemanda.pdf](#) / [Primera Instancia](#)

¹⁹ Pág. 11/ [008ContestacionDeDemanda.pdf](#) / [Primera Instancia](#)

generales que hacían parte del contrato de seguro vertido en dicha póliza, el cual fue dejado en blanco.

Igual circunstancia se presenta con las demás exclusiones alegadas, esto es, el *“USO DISTINTO AL ESTIPULADO EN LA PÓLIZA, REMOLQUE A OTRO VEHÍCULO CON O SIN FUERZA PROPIA”* y *“LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO FUERA DE LAS RUTAS HABILITADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE”*, por encontrarse contempladas dentro de las mismas condiciones.

Es decir que, en este caso, no se acreditó que las exclusiones con las que fue soportada la excepción nominada *“AUSENCIA DE COBERTURA”* efectivamente se hubiesen acordado entre las partes, pues en parte alguna se incluyeron dentro de las condiciones particulares del contrato de seguro objeto de examen, ni fueron éstas a las que remitió la póliza, por lo que no puede estimarse que hacen parte de dicho negocio jurídico.

Así las cosas, resulta preciso revocar la decisión de declarar probada la citada excepción, para en su lugar, declararla impróspera y, disponer en consecuencia que dicha compañía cancele a los demandantes los perjuicios reconocidos hasta el límite del valor asegurado.

Es así que, según lo establecido en la póliza de responsabilidad civil No. 6158005604, el valor asegurado por MUERTE O LESIÓN A UNA PERSONA fue de \$53.560.000; sin embargo, por amparo de daño moral se pactó un sub-límite del 60% sobre la cobertura principal, previa deducción del 10% acordado, debiendo ser indexado a la fecha de esta sentencia y, hasta ese límite es que la aseguradora deberá asumir la indemnización reconocida a los demandantes, considerando el sub-límite y deducible ante referenciado

Lo anterior, en razón de que para nadie es desconocido el envilecimiento del dinero, y mucho más en economías inflacionarias como la nuestra; por supuesto que no es lo mismo pagar una suma específica en un momento determinado que años después, debiendo acudir a la indexación, que es el procedimiento por medio del cual se mantiene constante en el tiempo el valor de compra en toda transacción, o simplemente se mantiene el poder adquisitivo de la moneda.

Máxime cuando la sala expresamente reconoce la necesidad cierta de que esos montos que se pactan en la póliza como límite asegurable deben ser objeto de actualización para el momento del pago, como no puede ser de otra manera si tenemos claro que la finalidad del contrato de seguro es que el asegurador mantenga al asegurado indemne de los daños de cualquier tipo que cause al beneficiario de éste, esto es evitar la mengua en su patrimonio, sin embargo con la fórmula que avizoró en su momento para ello no se lograría tal cosa porque para efectos de la actualización de este monto, dijo la sala que el legislador *ex profeso* había previsto la circunstancia fáctica del artículo 1080 del C. de Comercio, norma que remite al 1077 *Ibíd.*, en la medida que presentada la reclamación a la aseguradora, y acreditado el siniestro y el monto de los perjuicios, si no se atendían, ésta debería pagar intereses moratorios a la tasa máxima legal, a partir del mes siguiente; sin embargo no se tuvo en cuenta para tal conclusión, que según lo ya definido por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria para ese momento y hasta ahora, esos intereses, en asuntos de responsabilidad patrimonial como la que acá se analiza, sólo se pueden causar a partir de la sentencia que determine la obligación

indemnizatoria y el monto de los perjuicios, aún en la segunda instancia.²⁰ lo que entonces seguiría dejando en el limbo la pretendida actualización en total detrimento no solo del asegurado que cuando contrató la póliza lo hizo con la intención de que ese riesgo, en caso de concretarse, fuera asumido por aquella y así proteger su patrimonio, sino además de la víctima beneficiaria que vería ostensiblemente reducida la posibilidad de una reparación integral a la cual tiene derecho. Pero no solo eso, implica también el rompimiento del equilibrio económico contractual, que debe examinarse de manera recíproca, y no solo en la perspectiva de la aseguradora.

En consecuencia, se procede a actualizar valor asegurado para el año 2012 (\$53.560.000), anualidad en la que ocurrió el siniestro, quedando así:

$$RA = VH * \frac{IPC_{FINAL}}{IPC_{INICIAL}}$$

$$RA = 53.560.000 * \frac{7,74}{3,40}$$

$$Ra = \$121.927.765$$

Al cual debe aplicarse el sub-límite del 60% y el deducible del 10%, ambos pactados en la póliza, como se indicó antes, debiendo en consecuencia, pagar el monto de \$65.840.993.

²⁰ H. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de mayo de 2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Precedente frente al cual el ponente tiene serios reparos pero que no es del caso plantearlos ahora con la ilusión que prontamente el Alto Tribunal reevalúe tal postura.

3. Conclusión.

Corolario de lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia, para declarar la falta de legitimación por activa únicamente de LEIDY JOHANA MAZO y hacer extensiva la condena a las demandadas MYRIAM RODRÍGUEZ RAMÍREZ y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS "COOMULTRASCON", al pago de los perjuicios morales ocasionados a los señores JAIME DANIEL MAZO DURANGO y GILMA INÉS MAZO DURANGO, con el fallecimiento del señor OSCAR DARÍO MAZO DURANDO, que se cuantifican en 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; así como al pago de las costas causadas en primera instancia; y revocar la decisión de declarar probada la excepción de "AUSENCIA DE COBERTURA", alegada por SEGUROS COLPATRIA S.A., para en su lugar, declararla impróspera e imponer a esta compañía aseguradora que del monto reconocido a los demandantes, por concepto de perjuicio moral, sufrague la suma de \$65.840.993.

Sin lugar a condenar en costas, en razón de que el reparo respecto de la única parte que se pronunció en esta instancia, le resultó favorable a la parte apelante.

III. DECISIÓN.

Con fundamento en lo expuesto, **la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad Constitucional y legal,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO, CUARTO y SEXTO de la parte resolutive de la sentencia proferida el día 24 de enero de 2017 por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, dentro del presente proceso Declarativo – Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual-, promovido por los señores en nombre propio y en representación de los menores MARTHA LUCIA, JOHN FREDY, CARLOS MARIO, LEIDY JHOANA MAZO; JAIME DANIEL MAZO DURANGO y GILMA INÉS MAZO DURANGO, para declarar la falta de legitimación por activa **únicamente** de LEIDY JOHANA MAZO y **condenar** a las demandadas MYRIAM RODRÍGUEZ RAMÍREZ y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS “COOMULTRASCON”, al pago de los perjuicios morales ocasionados a los señores JAIME DANIEL MAZO DURANGO y GILMA INÉS MAZO DURANGO, con el fallecimiento del señor OSCAR DARÍO MAZO DURANDO, que se cuantifican en 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; así como al pago de las costas causadas en primera instancia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la decisión antes referenciada, para en su lugar, DECLARAR IMPRÓSPERA la excepción denominada “*AUSENCIA DE COBERTURA*” e imponer en consecuencia, a SEGUROS COLPATRIA S.A. que, de los perjuicios morales reconocidos a los demandantes, sufrague la suma de \$65.840.993, con fundamento en el contrato de seguro contenido en la póliza 6158005604.

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta providencia a los sujetos procesales por el medio más expedito y **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Proyecto discutido y aprobado en sala de la fecha

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados, (Firmados electrónicamente)

BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA

JULIÁN VALENCIA CASTAÑO

(Con aclaración y salvamento parcial de voto)

PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA

Firmado Por:

Benjamin De Jesus Yepes Puerta
Magistrado

Sala Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Julian Valencia Castaño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Piedad Cecilia Velez Gaviria
Magistrada
Sala 002 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Salvamento Parcial De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eca185035d675adbdef4b979d5f5e50d5947cf2e98060cc161b63f6273e0349f**

Documento generado en 19/03/2024 04:23:36 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>